

## REPÚBLICA DE COLOMBIA



### RAMA JUDICIAL

### TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

Medellín, dos (2) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

La Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, integrada por los Magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES (ponente), VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO y SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE, cumplido el traslado de que trata el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, procede a dictar la sentencia que corresponde en este proceso ordinario instaurado por MARIELA MAYA DE SUÁREZ en contra del ESTABLECIMIENTO ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO ESCINDIDO DE EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN E.S.P (Radicado 05001-31-05-008-2020-00305-01).

### ANTECEDENTES

Pretende la demandante el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes causada por el fallecimiento de su cónyuge Uladislao Suárez Ruiz a partir del 04 de octubre de 2015 cuando acaeció su muerte, junto con los intereses moratorios o en subsidio la indexación y las costas del proceso.

Al efecto narró que contrajo matrimonio con Uladislao Suárez el 16 de noviembre de 1954 de donde procrearon siete hijos, todos mayores de edad sin discapacidad. Empresas Varias de Medellín mediante la Resolución N° 186 del 10 de julio de 1989 concedió al señor Suárez una pensión de jubilación a partir del 24 de mayo de 1989, cuya mesada ascendió a \$74.057,85. El pensionado falleció el 04 de octubre de 2015 por causas de origen común. Explicó que desde las nupcias convivieron de manera continua e ininterrumpida hasta inicios de 1978, a partir de cuando se sostuvo una buena

relación sin que existiera divorcio, siendo vistos como compañeros incluso luego de la interrupción de la convivencia. En noviembre de 2015 solicitó el reconocimiento de la prestación, la que fue negada por Resolución N° 106 del 25 de julio de 2016 por no haber acreditado la vida en común en los cinco años anteriores a la muerte.

EI ESTABLECIMIENTO ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO ESCINDIDO DE EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN E.S.P dio respuesta oportuna al líbello con aceptación del matrimonio, el fallecimiento del pensionado y la negativa de la prestación. Presenta oposición a lo pretendido por considerar insatisfechos los requisitos de ley, en tanto se dedujo de la investigación desplegada que la pareja no tenía convivencia desde hacía 40 años, aspecto esencial para el otorgamiento de la prestación. Como medios exceptivos formuló los de mérito que denominó falta de requisitos legales establecidos en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, ausencia de vínculo material, ausencia de dependencia económica del solicitante, prescripción de las mesadas y mala fe.

Surtido el trámite de rigor, el 28 de marzo de 2022 el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellín profirió sentencia, oportunidad en la que CONDENÓ al demandado a reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes o sustitución pensional por cuenta del fallecimiento de su cónyuge, a partir del 18 de septiembre de 2017. DECLARÓ probada parcialmente la excepción de prescripción respecto de las mesadas causadas con anterioridad. CONDENÓ al demandado a que liquide el respectivo retroactivo pensional teniendo en cuenta la mesada pensional que venía percibiendo el fallecido para octubre de 2015, incluyendo la mesadas de junio y diciembre sin perjuicio de los incrementos legales. CONDENÓ al reconocimiento y pago de los intereses moratorios a partir del 18 de septiembre de 2017 sin ser procedente la indexación pedida de manera subsidiaria. CONDENÓ en costas al establecimiento demandado, fijando las agencias en derecho en la suma de \$5.000.000.

La activa se apartó de manera parcial de la determinación adoptada, porque aduce una indebida aplicación de los artículos 488 del CST y 151 del CPTSS

al no tenerse en cuenta la actitud diligente de la demandante para reclamar la pensión, habiendo sido inducida en error por la parte demandada en cuanto a que no le asistía el derecho buscado, pasando varios años para darse cuenta de lo contrario, por lo que no comparte que deba asumir las consecuencias jurídicas del error de la convocada cuando realizó la reclamación oportunamente. En igual sentido, pide que los intereses de mora se concedan desde el momento mismo de la muerte.

El establecimiento administrador demandado también discrepó de la determinación judicial en lo que a la condena de la pensión de sobrevivientes respecta, por razonar lo trascendental del elemento de convivencia que no se demuestra, señalando que hay sentencias de unificación que imponen necesaria una convivencia acreditada en los 5 años anteriores a la muerte para el caso de los pensionados fallecidos, y la demandante pese a continuar casada con Uladislao Suárez, no tenían vida marital, no estaba sujeta a él económicamente y era beneficiaria de una pensión de vejez con servicio de salud, por lo que la ausencia del ingreso del fallecido no afecta su mínimo vital. Acudió al contenido de la SU 149 de 2021 para insistir en el tiempo de convivencia previo a la muerte, solicitando la revocatoria de lo decidido.

En el término pertinente, las partes presentaron sus alegaciones de segunda instancia, con argumentos semejantes a los expuestos en las etapas procesales transcurridas en primer grado.

### CONSIDERACIONES

No es tema de discusión al interior del plenario que Mariela Maya de Suárez y Uladislao Suárez Ruiz contrajeron matrimonio el 16 de noviembre de 1954 (Pág. 12 Archivo 01), la primera percibe una pensión de vejez producto de su trabajo, y el causante fue pensionado por jubilación por parte de Empresas Varias de Medellín por medio de la Resolución N° 186 del 10 de julio de 1989 a partir del 24 de mayo de 1989 (Págs. 16-17 Archivo 01), dando consentimiento expreso al Establecimiento Público para asumir la acreencia pensional a su favor, habiendo fallecido el 04 de octubre de 2015 (Pág. 14 Archivo 01 y 6 Archivo 08). La demandante solicitó la sustitución pensional,

negada por acto administrativo N° 106 del 25 de julio de 2016 (Págs. 19-22 Archivo 01 y 61-64 Archivo 08) por encontrarse incumplido el requisito de convivencia en virtud a lo que exige el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003. Tampoco es objeto del debate la obligación que recae en la pasiva sobre lo debatido, debido al proceso de normalización del pasivo pensional de Empresas Varias de Medellín donde se dio la asunción por parte del Establecimiento Administrador del Patrimonio Escindido de Empresas Varias de Medellín E.S.P - APEV- de las obligaciones pensionales sobre las que se dio su consentimiento, lo que implica la sustitución de las prestaciones por jubilación arrojadas.

Acorde con lo anterior y a los argumentos de la alzada, el problema jurídico en esta instancia se circunscribe a establecer si Mariela Maya de Suárez acredita en debida forma el requisito de convivencia, necesario para ser beneficiaria en su calidad de cónyuge de la pensión de sobrevivientes con causa de la muerte del pensionado Uladislao Suárez Ruiz ocurrida el 04 de octubre de 2015. De ser ello así, habrán de revisarse los términos de la concesión y la fecha desde cuando lugar a los intereses de mora.

Pues bien, para resolver se tiene que la normatividad aplicable es la vigente al momento en que acaeció la contingencia asegurada, por lo que al haber ocurrido el óbito del pensionado el 04 de octubre de 2015, debe aplicarse lo que dispone el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 13 de la Ley 797 de 2003 para definir el derecho a la pensión de sobrevivientes deprecada, que en su literal a) señala como beneficiarios de la prestación *“en forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte”*.

*... Si no existe convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal pero hay una separación de hecho, la compañera o compañero*

*permanente podrá reclamar una cuota parte de lo correspondiente al literal a en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años antes del fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente;*

Así, para quien pretenda ser beneficiaria de una pensión de sobrevivientes debe demostrar de manera cierta y convincente la convivencia por un espacio de cinco años con el causante, independientemente de que sea un afiliado o un pensionado, en concordancia con lo definido por la SU 149 de 2021, que se opuso a la postura jurisprudencial de la H. Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Laboral- que determinó como verdadero alcance del literal a) del art. 13 de la Ley 797 de 2003 a la luz del precepto constitucional de favorabilidad, *in dubio pro operario*, que el tiempo de convivencia mínima de cinco (5) años, solo es exigible en caso de muerte del pensionado (Ver SL1730-2020 reiterada en SL3843-2020, SL3785-2020, SL4606-2020, SL489-2021, SL362-2021, SL1905-2021, SL2222-2021 y SL5270-2021), con el argumento de violar tal decisión directamente los principios de igualdad y sostenibilidad financiera del sistema pensional sin justificación objetiva, y no armonizar con los propósitos de la pensión de sobrevivientes ni con los del requisito de convivencia.

Adicionalmente, dadas las circunstancias específicas del caso la H. Corte Suprema de Justicia también en su interpretación literal de la norma, le dio una especial relevancia al concepto de unión conyugal y en ese sentido, privilegió el derecho del cónyuge a recibir la pensión de sobrevivientes, aun cuando estuviera separado de hecho del fallecido durante sus últimos años de vida, siempre y cuando acredite una convivencia real y efectiva durante el lapso de cinco años, pero no necesariamente anteriores al deceso, sino en cualquier tiempo, puesto que de esta manera se da alcance a la finalidad de proteger a quien desde el matrimonio aportó a la construcción del beneficio pensional del causante, en virtud del principio de solidaridad que rige el derecho a la seguridad social.

Ello naturalmente, presupone que no hay vida en común de la pareja de casados al momento de la muerte, vínculo afectivo, comunicación solidaria y

ayuda mutua que permita considerar que los lazos familiares siguieron vigentes, señalándose por la Corporación en sentencias como la SL1869-2020, SL2015-2021, SL5260-2021, SL2318-2022 y SL3651-2022 la exigencia de una relación de familia actuante pese al rompimiento de la vida en común no está en armonía con la ley, de acuerdo al actual criterio, toda vez que si bien es cierto, la jurisprudencia exige al cónyuge separado de cuerpos o de hecho convivencia de por lo menos cinco años en cualquier tiempo, también lo es, que en estos eventos no se exige que el potencial beneficiario de la prestación de sobrevivientes demuestre que mantuvo un vínculo de solidaridad y acompañamiento espiritual o económico hasta el momento de la muerte, ya que ello se configura en un requisito adicional que no establece el inciso 3.º del literal b) artículo 13 Ley 797 de 2003, ya que en el texto de la aludida disposición se hace referencia es a que, en ese caso, la consorte tiene derecho a una cuota parte de la pensión de sobrevivientes, proporcional al tiempo convivido con el afiliado fallecido, contenido e interpretación que encuadra en las realidades o situaciones sociales que regula dicho precepto.

Se clarificó por la alta Corporación desde la sentencia con Radicado 41637 del 24 de enero de 2012 que tal postura se predica también, para cuando no existe compañera o compañero permanente al momento del fallecimiento del afiliado o pensionado bajo criterios de equidad y justicia, en la medida que no sería proporcional privar a la (el) esposa (o) del reconocimiento de la pensión, en el evento de no concurrir aquel supuesto (Ver SL3973-2020), cuyo alcance es la protección de quien desde el matrimonio aportó a la construcción del beneficio pensional del causante, en virtud del principio de solidaridad que rige el derecho a la seguridad social.

En tal contexto, debe brotar del acervo probatorio que existió con el fallecido Suárez Ruiz una convivencia ininterrumpida de por lo menos cinco (5) años anteriores a la muerte o en cualquier tiempo, encontrándose debidamente acreditada la calidad de cónyuge de la actora por medio del registro civil de matrimonios que da cuenta de su celebración dada el 16 de noviembre de 1954 (Pág. 12 Archivo 01).

Para tal efecto, fue recepcionada la prueba testimonial compuesta por JOSÉ FERNANDO SUÁREZ MAYA - hijo de la pareja- y ANA CECILIA OSPINA YEPES - vecina y cuñada de la pareja-. Señalaron que la pareja desde el matrimonio estuvo unida hasta que decidieron separarse de hecho luego de aproximadamente 30 años de convivencia, ya estando mayores los siete hijos procreados, a partir de cuando se sostuvo una relación cordial y amistosa, estando presente la señora Maya en el período de enfermedad del causante pese a no compartir residencia en tanto seguían siendo vecinos.

Similar información puede extraerse de la investigación que desplegó la responsable de la prestación por medio de un tercero, de donde se extrajo de las entrevistas rendidas por José Jesús Moncada Monsalve -Vecino y amigo-, Lía Yepes - Vecina-, María Eugenia Guevara Villa - vecina-, Luis Elkin Rodríguez Estrada - Vecino y amigo de los hijos del pensionado- y Jairo de Jesús Avendaño Calderón - vecino-, que en efecto la pareja para el momento del deceso se hallaba separada de hecho luego de estar casados desde hace más de 50 años, desde aproximadamente 40 años atrás, conviviendo el pensionado con una de sus hijas (Págs. 42-57 Archivo 08).

Las anteriores probanzas dan cuenta como bien lo asegura la parte enjuiciada desde su escrito de respuesta que no existió una convivencia en el sentido estricto impuesto por el legislador y la jurisprudencia hasta el momento en que ocurrió el evento desafortunado, y de hecho no así lo pretendió hacer ver la parte promotora del juicio, quien desde su escrito demandatorio en el hecho quinto anunció la separación de la pareja para 1978, la que tiene un acercamiento con todos los dichos de los intervinientes en la investigación administrativa y judicial, siendo indiscutible que la convivencia finalizó sin retorno a una vida en pareja, evidenciándose la intención de los esposos de no dar conservación a su vida en unión matrimonial.

No obstante lo previo, como quiera que bajo las precisas circunstancias del asunto se trata de una cónyuge separado de hecho con un tiempo de convivencia de más de cinco (5) años en cualquier tiempo, esto es entre noviembre de 1954 y aproximadamente 1975, se habilita la posibilidad a la actora para acceder a la pensión de sobrevivientes, pues ello lo permite es la

subsistencia del vínculo matrimonial hasta cuando acaeció la defunción, por lo que estando por fuera de cualquier discusión la celebración del matrimonio sin divorcio o cesación del vínculo por más de 20 años, existe plena claridad de la satisfacción del requisito de convivencia para su particular, lo que deja ver que ha quedado debidamente demostrada la condición de beneficiaria de la pensión de sobrevivientes de la demandante en su calidad de cónyuge separada de hecho, habiendo quedado despejado que el derecho no se derruye por ausencia de compañera permanente.

En lo que atañe al monto de la pensión, se tiene que la *a quo* lo definió en el equivalente al valor de la mesada pensional que percibía el pensionado para el año 2015 cuando se dio su muerte, cuyo retroactivo pensional debe ser calculado desde el 17 de septiembre de 2017 como se definió en primera instancia, por intervención del fenómeno prescriptivo de que tratan los artículos 488 del CST y 151 del CPTSS por dejar transcurrir el término trienal desde el momento en que se efectuó la reclamación el 20 de octubre de 2015 (Pág. 21 Archivo 01) cuando se dio la interrupción de esta figura, y hasta que se radicó el escrito de demanda el 17 de septiembre de 2020 (Archivo 02), no siendo de recibo el argumento expuesto por la mandataria de la demandante en su recurso, cuando atribuye el exceso en ese lapso a la demandada dada la negativa del derecho, pues darle razón implica que ante decisiones contrarias a los intereses de los solicitantes en sede administrativa, la prescripción se vea atada a un tiempo indefinido hasta cuando la petente decida acceder a la justicia, lo que la hace perder su naturaleza y propósito, siendo precisamente la acción judicial la vía idónea para que en este plano se decida o no sobre la procedencia de la prestación, cuya inaplicación no surge por la sola afirmación de haber sido inducida en error, encontrando que de hecho al tratarse de una postura jurisprudencial, la demandada decidió acorde a la literal normativa del asunto, por lo que el transcurso del tiempo indiscutiblemente debe acarrear la consecuencia jurídica declarada, que no es otra que la prescripción de las mesadas que se causaron desde el 05 de octubre de 2015 y hasta el 16 de septiembre de 2017.

Sobre los intereses moratorios debe partirse del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, el cual establece que en caso de mora en el pago de las mesadas

pensionales o el no pago de mesadas dentro del plazo previsto en la ley para el otorgamiento de la pensión, la entidad correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectúe el pago.

Para determinar la procedencia de dicho gravamen, dada su naturaleza resarcitoria, debe analizarse la conducta de la entidad convocada en el retardo o negación del reconocimiento o pago de la pensión, ya que, en el evento de demostrarse que su proceder tiene respaldo en las normas que en un comienzo regulaban la situación, su postura proviene de la aplicación minuciosa de la ley sin el alcance que puedan darle los jueces, sin intervención de situación que le son imposibles de predecir, o cuando el reconocimiento de la pensión obedece a la creación de criterio jurisprudencial, debe exonerársele de los intereses de mora (SL704 de 2013, SL7893-2015 y SL2786 de 2020).

Bajo las anteriores previsiones, se tiene que el Establecimiento Público Administrador contrario a lo decidido en la providencia, no tenía a su cargo los intereses moratorios pretendidos, porque es patente que la pensión de sobrevivientes que se concede al polo activo de esta acción, proviene como se dijo, de una posición jurisprudencial que no es vinculante para la convocada; no obstante, esa determinación no fue atacada por la vía de apelación, y en ese orden, no es posible proceder con su modificación o revocatoria, debiendo por demás señalarse la inviabilidad de impartir orden de este rubro desde fecha previa a la ordenada y más concretamente desde la muerte, por un lado, porque el legislador dispuso un término prudente y razonable para que las administradoras y encargadas de las prestaciones económicas definieran los derechos pensionales, por lo que su pago no se remonta a la fecha en que acaece la contingencia sino que en el particular pueden transcurrir dos meses para dar análisis a lo pedido - Ley 717 de 2001-, y por otro, porque para este punto también debe tenerse presente el tiempo que dejó transcurrir la demandante para impulsar el trámite judicial, que de manera alguna debe asumir la demandada con intereses de mora, encontrando ajustado que los mismos sean reconocidos a partir del 18 de septiembre de 2017 porque también fueron sujetos al fenómeno extintivo.

Conforme a lo expuesto, se procederá a confirmar la providencia apelada.

En esta instancia, en virtud de lo decidido no se causaron costas.

### DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Quinta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **CONFIRMA** la sentencia venida en apelación de fecha y procedencia conocidas. Sin costas.

Notifíquese la presente decisión por EDICTO (num.3°, lit. d., art. 41 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social en concordancia con el auto 550-2021 CSJ).

Los Magistrados,



CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES

VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO  
SIN FIRMA POR PERMISO AUTORIZADO



SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE

REPÚBLICA DE COLOMBIA

**RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  
SALA LABORAL**



**SECRETARÍA  
EDICTO**

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

**HACE SABER:**

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Radicación:</b>     | <b>05001310500820200030501</b>  |
| <b>Proceso:</b>        | <b>ORDINARIO LABORAL</b>  |
| <b>Demandante:</b>     | <b>MARIELA MAYA DE SUAREZ</b>   |
| <b>Demandado:</b>      | <b>ESTABLECIMIENTO PUBLICO ADMINISTRATIVO DEL<br/>PATRIMONIO ESCINDIDO DE EMPRESAS VARIAS DE<br/>MEDELLIN E.S.P</b> |
| <b>M. P.</b>           | <b>CARLOS ALBERTO LEBRUN MORALES</b>  |
| <b>Fecha de fallo:</b> | <b>2/05/2023</b>  |
| <b>Decisión:</b>       | <b>CONFIRMA</b>   |

El presente edicto se fija por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibídem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 3/05/2023 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

**RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS**

Secretario